



Déspotas disfrazados de demócratas

Por Kenneth Roth

Rara vez la democracia ha sido tan aclamada y a la vez tan vulnerada, tan promovida y a la vez tan incumplida, tan importante y a la vez tan decepcionante. Hoy en día, la democracia se ha convertido en el sine qua non de la legitimidad. Muy pocos gobiernos quieren ser considerados no democráticos. Sin embargo, las credenciales de los que se la atribuyen no han ido a la par de la creciente popularidad de la democracia. Estos días, hasta los dictadores manifiestos aspiran al estatus que confiere el sello de la democracia. Estos gobernantes, decididos a que los simples hechos no se interpongan en su camino, han dominado un arte de la retórica democrática que tiene muy poco que ver con su manera de gobernar.

¿Por qué otro motivo un líder tan despiadado como el presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, iba a convocar elecciones? ¿Para qué molestarse? Karimov dirige un gobierno que ha encarcelado a 7,000 personas por motivos políticos y religiosos, tortura habitualmente a los detenidos y tan sólo hace dos años masacró a cientos de manifestantes en Andiján. Se le puede considerar difícilmente un demócrata, y no tiene ninguna oposición real en las elecciones de diciembre de 2007 porque nadie se atreve a cuestionar seriamente su régimen. Ni siquiera se ha interpuesto en su camino una prohibición constitucional de un tercer mandato presidencial de siete años.

Sin embargo, este brutal presidente encuentra utilidad en la celebración de farsas electorales para legitimar su reinado. Lo mismo ocurre, entre otros, con Robert Mugabe de Zimbabue, Pervez Musharraf de Pakistán, Hosni Mubarak de Egipto, Meles Zenawi de Etiopía y Vladimir Putin de Rusia.

Hasta China ha entrado en el juego. En un discurso pronunciado en octubre de 2007 en el Congreso del Partido Comunista, el presidente Hu Jintao usó más de 60 veces la palabra “democracia” al pedir más de ella dentro del partido. Sin embargo, esto no le ha impedido prohibir los partidos políticos independientes, bloquear las iniciativas legales en defensa de derechos fundamentales y suspender las

actividades de incontables organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y sitios web. Y no hay elecciones nacionales. ¿Entonces qué tenía en mente? El partido permitió que 221 candidatos se disputaran 204 puestos en su Comité Central.

Las técnicas empleadas por dichos autócratas para controlar el carácter irritantemente impredecible de la democracia son cuanto menos creativas. Se enfrentan al desafío de parecer abrazar los principios democráticos mientras evitan cualquier riesgo de sucumbir a las preferencias del pueblo. El fraude electoral, la violencia política, la censura de la prensa, la represión de la sociedad civil e, incluso, el gobierno militar se han empleado para frustrar la posibilidad de que el proclamado proceso de democratización pueda conducir realmente a que el pueblo tenga una voz en el gobierno.

Parte de la razón por la que los dictadores pueden contar con salirse con la suya usando dichos subterfugios es que, a diferencia de los derechos humanos, la “democracia” no tiene una definición legal establecida. El concepto de democracia es un reflejo de que la mejor manera de seleccionar a un gobierno y guiar su trayectoria es otorgar la máxima autoridad a los que están sometidos a su poder. Dista de ser un sistema político perfecto, dado el riesgo de la indiferencia de la mayoría frente a las minorías y la posibilidad de que elementos poderosos tengan excesiva influencia, pero conocida famosamente como la forma “menos mala” de gobierno, en palabras de Winston Churchill, es una parte importante del ideal de derechos humanos. No obstante, no hay una Convención Internacional sobre Democracia, ni un tratado ampliamente ratificado que disponga cómo debe comportarse un gobierno para ganarse el sello de la democracia. El significado de la democracia depende demasiado del color del cristal con que se mire.

En contraste, el derecho internacional de derechos humanos otorga a todos los ciudadanos el derecho a “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de los representantes libremente elegidos” y a “votar” en “elecciones periódicas auténticas”, realizadas por “sufragio universal e igual” y por “voto secreto” que “garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”. También otorga una serie de derechos relacionados que deben considerarse esenciales para cualquier democracia sólida y significativa, lo que incluye los derechos que salvaguardan la diversidad y la fortaleza de la sociedad civil, y la libertad y vitalidad de la prensa, los derechos que defienden los intereses de las

minorías y los derechos que garantizan que los funcionarios y funcionarias gubernamentales estén sometidos al Estado de derecho. La gran fortaleza de los derechos humanos reside en su carácter específico y legalmente vinculante. Pero cuando los autócratas logran desviar las críticas por violar estos derechos pretendiendo ser demócratas, cuando pueden disfrutar de las ventajas de pertenecer al club de las democracias sin pagar la cuota del respeto por los derechos fundamentales, se pone en peligro la defensa global de los derechos humanos. ¿Para qué molestarse en cumplir una serie de reglas tan entrometidas como las dispuestas por el derecho internacional de derechos humanos cuando cualquier tirano, con unas cuantas maniobras, puede hacerse pasar por “demócrata”?

El mal uso del calificativo de demócrata no es un fenómeno totalmente nuevo. La antigua República Democrática Alemana (como se denominaba el ahora difunto Estado comunista monopartidista de Alemania Oriental) o la actual República Democrática Popular de Corea (el improbable nombre oficial de Corea del Norte) son buenos ejemplos. Pero pocos dieron crédito alguno a estas reivindicaciones orwellianas. La triste nueva realidad es lo fácil que es para los autócratas de hoy en día montarse una fachada democrática sin temor a las consecuencias.

No es que los líderes pseudodemocráticos tengan mucha legitimidad en sus países. La población local conoce perfectamente la amarga realidad de la farsa electoral. En el mejor de los casos, estos líderes obtienen el beneficio del cumplimiento fingido de las leyes nacionales que exigen elecciones. En cambio, una buena parte de la motivación detrás de este velo democrático se deriva de la legitimidad internacional que puede ofrecer un ejercicio electoral, independientemente de lo vacío que esté de contenido, para incluso el dictador más curtido. Debido a otros intereses—energía, comercio, antiterrorismo—las democracias más establecidas del mundo ven con frecuencia conveniente dar credibilidad aparente a estos falsos demócratas.

El caso más destacado ha sido el de Estados Unidos durante el gobierno del presidente George W. Bush. Con un paralelismo inquietante con los gobiernos abusivos de todo el mundo, el gobierno de Estados Unidos ha adoptado la promoción de la democracia como una alternativa más suave y confusa que la defensa de los derechos humanos. Estados Unidos sigue obteniendo una nota bastante buena dentro de los parámetros de la democracia, pero la conducta del gobierno Bush con respecto a la normas de derechos humanos es profundamente

inquietante. Al hablar de derechos humanos hay que mencionar Guantánamo, las cárceles secretas de la CIA, simulacros de ahogamiento, la entrega de personas a otros países, las comisiones militares y la suspensión del hábeas corpus. A pesar de la experiencia de las elecciones presidenciales de 2000, el debate sobre la democracia se desarrolla en un terreno más cómodo.

Dicho divorcio entre la democracia y las normas internacionales que le dan sentido contribuye a que los autócratas estén convencidos de que la simple celebración de elecciones, independientemente de las circunstancias, es suficiente para garantizar el calificativo de democrática. La respuesta de Bush a la declaración del “Estado de emergencia” en noviembre de 2007 por parte del entonces general Musharraf ilustra el problema. Incluso después del golpe efectivo de Musharraf y la detención de miles de opositores políticos, Bush dijo que Musharraf no había llegado a “cruzar la línea”. Bush podía difícilmente disfrazar el historial de Musharraf en materia de derechos humanos, así que declaró que Musharraf es “una persona que cree en la democracia” y que Pakistán se encontraba “en el camino hacia la democracia”. Pero si, a diferencia del derecho de derechos humanos, “el camino hacia la democracia” permite la reclusión de opositores políticos, la destitución de jueces independientes y el silenciamiento de la prensa independiente, es fácil entender por qué tiranos de todo el mundo tienen la tentación de creer que ellos también pueden ser elegibles. A medida que candidatos tan indignos como los líderes de Egipto, Etiopía, Kazajstán y Nigeria se envuelven en el manto de la democracia con escasa objeción internacional, el concepto de democracia se va abaratando y su componente de derechos humanos se dejan a un lado.

Para colmo de males, los esfuerzos del gobierno Bush por racionalizar la invasión de Irak en términos de promoción de la democracia ha facilitado a los autócratas equiparar la presión democratizadora sobre ellos con una agenda imperialista y militarista. Tristemente, esta cínica estratagema suele funcionar, porque, hoy en día, en muchas partes del mundo se considera que la campaña pro democrática liderada por Washington es una pretexto para la invasión militar o el cambio de régimen, e incluso una fórmula para el caos. Los dictadores han aprendido que la evocación de las imágenes de Irak puede ser útil para suavizar la presión democratizadora. Y los gobiernos que podrían haber defendido una visión más firme de la democracia se resisten a hacerlo por temor a que los consideren partidarios de la agenda de Bush.

Otros gobiernos también han tratado elecciones vacías de significado como una excusa para retomar las relaciones habituales con dictaduras que merecen una denuncia, en lugar de una alianza. Un ejemplo destacado es el trato ofrecido a Kazajstán por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), un organismo compuesto de 56 gobiernos de Europa y Asia Central, además de Estados Unidos y Canadá. En agosto de 2007, el presidente Nursultan Nazarbaev convocó elecciones parlamentarias en las que la OSCE descubrió problemas en el recuento de votos en el 40 por ciento de las mesas electorales que visitó. El resultado predecible: el partido de Nazarbaev obtuvo todos los puestos en la Cámara Baja del Parlamento con una mayoría declarada del 88 por ciento de los votos, y se afirmó que ningún partido de la oposición había superado el siete por ciento necesario para tener representación parlamentaria. Este fraude se produjo en un contexto de violaciones constantes y generalizadas de los derechos humanos: los partidarios del gobierno dominan los medios de comunicación audiovisuales, los periodistas independientes son amenazados y hostigados por criticar al presidente o su gobierno, el libelo sigue considerándose un delito penal y los activistas de la oposición corren el riesgo de ser encarcelados, como en el caso de Alibek Zhumbaev, que cumple actualmente una condena de cinco años de prisión por injuriar a Nazarbaev.

Pero la OSCE, en contra de todas las pruebas, afirmó que las elecciones “habían hecho avanzar a Kazajstán en su evolución hacia un país democrático”. La intención aparente de esta interpretación idealista de la realidad era intentar no apartar a Kazajstán de su objetivo largamente buscado de convertirse en la primera ex república soviética que presidiera la OSCE. Alemania, preocupada por cuestiones energéticas, se sumó a Rusia en el respaldo a esta candidatura inadecuada. Aunque los gobiernos estadounidense y británico lideraron la oposición, también cedieron en el último momento. En noviembre de 2007, los países de la OSCE concedieron por consenso a Kazajstán la presidencia del organismo en 2010. Kazajstán, en lugar de tener que demostrar en la práctica el respeto por la democracia y las normas de derechos humanos que constituyen elementos fundamentales de la OSCE, sólo tuvo que comprometerse a emprender una reforma de los medios de comunicación y las elecciones, y a dejar de intentar debilitar el mandato de derechos humanos de la OSCE. Este tipo de simplificación de la democracia, con escasas protestas de los gobiernos mejor posicionados para ejercer de guardianes, ha facilitado que líderes autoritarios como Nazarbaev se disfracen de demócratas y desvíen la presión para un cambio más significativo en materia de derechos humanos.

Por supuesto, la insistencia en una democracia real no es la única prueba del compromiso de la comunidad internacional con los derechos humanos. También tiene una importancia fundamental su respuesta a las atrocidades en masa en lugares como el este de Chad, Colombia, el este del Congo, la región Ogaden en Etiopía, Irak, Somalia, Sri Lanka y la región de Darfur en Sudán, además de las sociedades cerradas o la grave represión en países como Birmania, China, Cuba, Eritrea, Libia, Corea del Norte, Arabia Saudita y Vietnam. Estas situaciones acuciantes se tratan en detalle dentro del presente informe. Pero la causa de los derechos humanos tiene que preocuparse no sólo de estos casos graves, sino también de los gobiernos que pueden ser ligeramente más abiertos pero siguen utilizando medidas represivas para impedir cualquier cuestionamiento de su poder. Su conducta es más fácil cuando se permite que simples gestos de democratización releguen el respeto por toda la colección de derechos humanos.

Para evitar este juego de manos e impedir que se abuse del atractivo de la “democracia” como un sustituto menor de normas de derechos humanos más rigurosas, existe la necesidad urgente de recuperar el significado pleno del ideal democrático. Esto no significa defender una forma de gobierno en sentido estricto. La democracia se desarrolla legítimamente de muchas maneras, que incluyen sistemas basados en la representación proporcional y modelos de sufragio directo, las que tienen una presidencia fuerte o las centradas en un poderoso primer ministro, las que otorgan la principal autoridad al poder ejecutivo y las que prefieren un mayor poder legislativo. Pero todas las democracias que merezcan llamarse así tienen ciertas características comunes, entre ellas, elecciones competitivas periódicas que se celebran libremente y se recuentan de manera transparente y precisa, un número significativo de partidos políticos, medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil que ofrecen a los ciudadanos y ciudadanas—incluidas las minorías—toda una serie de oportunidades para unirse a entre sí y hacer oír sus voces, y un sistema jurídico que garantiza que nadie—y especialmente ningún funcionario o funcionaria del gobierno—esté por encima de la ley.

En 2007, la democracia demostró una vitalidad constante en lugares como Sierra Leona, Jamaica, Polonia y Australia—todos ellos países en los que hubo alternancia de poder y los partidos de la oposición ocuparon el gobierno tras elecciones ampliamente consideradas libres y justas. En Turquía, cuando las fuerzas armadas lanzaron el denominado golpe de correo electrónico con la intención de impedir que

el gabinete islamista moderado, elegido democráticamente, nombrara presidente a uno de sus funcionarios, Abdullah Gül, el gobierno convocó a elecciones generales anticipadas, obtuvo una abrumadora reafirmación de su mandato, y de todos modos nombró presidente a Gül. El deseo de democratización del pueblo turco demostró ser fuerte.

No obstante, muchos dictadores están deseando legitimarse con poco esfuerzo. Si pueden lograrlo con una farsa electoral, tanto mejor. Su capacidad para ello depende en gran parte de la vigilancia y la insistencia de las democracias establecidas en un sistema democrático en todas sus dimensiones, lo que incluye el respeto por toda una serie de derechos humanos y el Estado de derecho. No es fácil obtener un compromiso con la democracia basado en los principios. Puede implicar ejercer presión sobre aliados dictatoriales o promover derechos que incluso algunas de las democracias establecidas preferirían no subrayar. Pero es necesario un compromiso de principios para que la promoción de la democracia sea una fuente de presión real para el respeto por los derechos humanos, en lugar de un nuevo instrumento para eludir las normas internacionales y optar por una alternativa cómoda y vacía.

La recuperación del poderoso ideal democrático, tan importante para la causa de los derechos humanos y, sin embargo, tan susceptible de ser manipulado como un sustituto falso aunque seductor, exige prestar más atención a los ingeniosos subterfugios de sus detractores. A continuación ofrecemos un resumen de las tendencias recientes adoptadas por los gobiernos que violan los derechos humanos para subvertir o manipular la democracia con el objetivo evitar el debate sobre derechos humanos.

La defensa de la democracia también requiere evitar algunos de los obstáculos que han socavado recientes iniciativas en este sentido. Como se describe a continuación, muchas democracias establecidas han caído en la tendencia de confiar en el “demócrata” en lugar de en los principios democráticos, de aceptar la falsa dicotomía de que es mejor un déspota conocido que un déspota por conocer, de afirmar que la democracia podría florecer aunque esté disociada de los derechos humanos que le dan sentido, o de adaptar las demandas de una democracia verdadera en función del valor estratégico del presunto democrata. Hay que resistirse a estas tendencias para que la promoción de la democracia alcance su potencial de fuerza positiva para los derechos humanos.

Juegos retóricos

El uso evasivo de la democracia por parte de los líderes autoritarios suele iniciarse con juegos de palabras y prestidigitaciones retóricas para sugerir que las restricciones que socavan la democracia son realmente necesarias para salvarla. En Pakistán, por ejemplo, Musharraf impuso el “Estado de emergencia” para impedir que el entonces independiente Tribunal Supremo dictaminara la ilegalidad de su elección como presidente siendo jefe de las fuerzas armadas. A pesar de esta motivación muy personal, alegó que el golpe era necesario para “preservar la transición democrática”. De manera similar, en Bangladesh, un gobierno provisional nombrado por el Ejército prohibió todas las actividades políticas y sindicales, y limitó la libertad de prensa, todo justificado por la preparación de elecciones generales fiables.

Muchos líderes represivos han intentado redefinir la democracia introduciendo un calificativo devastador o un adjetivo antitético. El presidente Vladimir Putin, mientras paraliza la democracia mediante la anulación de todos los centros de influencia que compiten con él en Rusia, se ha convertido en un defensor de la “democracia soberana”, lo que significa en la práctica que la democracia es lo que quiera el soberano que sea. Cuando la junta militar birmana reprimió a los monjes que se manifestaron y aplastó violentamente la disidencia, habló de la necesidad de una “democracia disciplinada”. China lleva tiempo promoviendo la “democracia socialista”, lo que significa un centralismo vertical que elimina las opiniones de la minoría.

En Pakistán, Musharraf justificó el “Estado de emergencia” como una “verdadera democracia” y explicó: “Queremos democracia, queremos derechos humanos, queremos libertades civiles pero lo vamos a hacerlo a nuestra manera”. En Libia, Muammar el-Qadhafi emplea el término “democracia participativa” para justificar la abolición de los partidos políticos independientes basándose en que la población no necesita su intermediación porque participa directamente en la dirección del país mediante asambleas establecidas por el gobierno. En la versión cubana del mismo concepto, los candidatos deben ser aprobados previamente por organizaciones de masas controladas por el gobierno, y la Constitución limita seriamente la existencia de cualquier organización política que no sea el Partido Comunista.

Fraude electoral

El fraude electoral ordinario es una de las estrategias más habituales para eludir las incertidumbres de la democracia. Además del caso de Kazajstán, antes citado, están los recientes ejemplos de Nigeria y Chad.

En Nigeria, nación que enfrenta la primera transferencia de poder de un dirigente civil a otro desde la independencia del país en 1960, el gobernante Partido Popular Democrático recurrió al fraude masivo para asegurarse de que su candidato, Umaru Yar’Adua, sucediera en la presidencia a Olusegun Obasanjo en las elecciones de abril de 2007. Hay que reconocer que, en un intento por redimir cierta legitimidad, Yar’Adua ha puesto en marcha un proceso de reforma electoral, ha permitido que los tribunales revoquen varias de las victorias fraudulentas de su partido a nivel estatal y continúa sometido a la revisión judicial de su propia cuestionable elección. Pero nadie ha sido enjuiciado por la flagrante manipulación de resultados, la compra de votos y la intimidación política que fueron claves en su “elección”, por lo que el pueblo nigeriano está perdiendo confianza en que su retórico reformista se traduzca en una nueva realidad democrática.

En Chad, el presidente Idriss Déby, que llegó al poder en 1990, le ha concedido el imprimátur de la democracia a su régimen mediante la celebración de tres fingidas elecciones presidenciales. En 2005, se deshizo de una disposición que le impedía postularse por tercera vez a un mandato presidencial de cinco años enmendando la Constitución en un referendo plagado de irregularidades. Al anticipar el fraude, los grupos de la oposición se negaron a presentar candidatos para las elecciones presidenciales de 2006, lo que permitió que Déby derrotara fácilmente a cuatro débiles contrincantes, entre ellos dos ministros del gobierno. Estados Unidos y la Unión Europea declinaron enviar observadores, mientras la votación se vio empañada por la baja participación, votos emitidos por menores de edad y votos múltiples persona.

Control de la maquinaria electoral

La imparcialidad de las elecciones depende de la independencia de quienes las organizan, por lo que no es sorprendente que una de las maneras preferidas por los gobernantes para manipular las elecciones sea llenando la maquinaria electoral con sus simpatizantes. En Azerbaiyán, donde el fraude electoral ha sido un problema persistente, el partido gobernante del presidente Ilham Aliyev designa al representante

del Poder Ejecutivo y controla a una mayoría en la Comisión Electoral. En Zimbabwe, los partidos de la oposición están excluidos de la Comisión Electoral. En Tailandia, la nueva Constitución promovida por las fuerzas armadas permite que los miembros de la Comisión Nacional Electoral sean seleccionados por el Senado, cuyos senadores eran antes electos y ahora son designados.

El caso de Malasia demuestra por qué los gobiernos intentan controlar la maquinaria electoral. Su Comisión Electoral dominada por el gobierno rechazó los intentos de la oposición de eliminar a presuntos votantes fantasma de los registros, acabar con el uso generalizado del voto por correo para los funcionarios del gobierno y permitir el acceso de todos los partidos a los medios de comunicación estatales. De manera similar, Camboya ha convertido en un arte la celebración de elecciones convocadas por una Comisión Nacional Electoral controlada por el gobernante Partido Popular Camboyano, quien después se limita a ignorar las denuncias de violencia, fraude o intimidación presentadas por observadores independientes o partidos de la oposición.

Debido a estas deficiencias, las instituciones internacionales suplementan con frecuencia la labor de los mecanismos nacionales de supervisión electoral. Pero éstas también han sido el objetivo de los que intentan controlar las elecciones. El Kremlin logró impedir que observadores de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, el principal organismo de observación electoral de la OSCE, revisara las elecciones parlamentarias rusas de diciembre de 2007 mediante retrasos en la concesión de visas, la limitación del número de observadores internacionales admitidos y las amenazas de impedir que la OSCE ofreciera su valoración hasta mucho después de que los medios rusos controlados por el gobierno hubieran moldeado la opinión pública sobre la votación.

Bloqueando y disuadiendo candidaturas de la oposición

Una manera obvia de manipular las elecciones es impedir que se presenten candidatos de la oposición. Irán ha perfeccionado este método: su Consejo de Guardianes de la Revolución rechazó alrededor de la mitad de los candidatos a las elecciones parlamentarias de 2004, a la mayoría de los cuales consideró aparentemente demasiado reformistas. En Cuba, la Asamblea Nacional dominada por el Partido Comunista tiene autoridad para rechazar cualquier posible candidato a un puesto público. Túnez se rehúsa a legalizar a la mayoría de los partidos más

genuinos de la oposición. En Tailandia, la comisión electoral del gobierno militar adoptó nuevas reglas estrictas que permiten la descalificación de candidatos por cuestiones tan triviales como tocar música en mítines o tener un póster de un tamaño no aprobado—con el objetivo evidente de eliminar a candidatos del Partido del Poder del Pueblo, sucesor del partido Thai Rak Thai (Tailandeses Aman lo Tailandés) del derrocado primer ministro Thaksin Shinawatra.

En varios casos se utilizaron medidas más punitivas. En 2005, pocos meses antes de las primeras elecciones parlamentarias multipartidistas y presidenciales de Uganda en 26 años, el gobierno encarceló al principal candidato presidencial de la oposición, Kizza Besigye, acusado por motivos políticos de traición y violación. Fue puesto en libertad posteriormente, pero la detención frustró significativamente su capacidad para disputar las elecciones algunos meses después, y perdió frente al presidente Yoweri Museveni. En marzo de 2007, en Zimbabue, el gobierno transmitió un mensaje similar de disuasión a sus posibles contrincantes al hacer que la policía propinara una grave paliza al líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, y detuviera a numerosos miembros de la oposición.

Turkmenistán tuvo finalmente la oportunidad de ofrecer a sus ciudadanos y ciudadanas una elección real después de la muerte en diciembre de 2006 de Saparmurat Niazov, el tirano que dirigió el país durante 21 años y destrozó su sistema de bienestar social. En cambio, el presidente del Parlamento, designado por la Constitución como presidente provisional en sucesión de Niazov, fue encarcelado acusado de hacer que un familiar intentara suicidarse, lo que allanó el camino para que Gurbanguly Berdymukhamedov asumiera el poder. Cinco candidatos “alternativos” de bajo nivel, todos ellos representantes del único partido político del país, compitieron sin éxito contra Berdymukhamedov. No se permitió regresar del exilio a ningún líder de la oposición para presentarse como candidato en las elecciones.

En ocasiones se permite que los candidatos de oposición participen en las elecciones, pero luego se les castiga por ello, lo que disuade a cualquier otra persona de intentarlo en el futuro. El gobierno del presidente Alexander Lukashenko en Bielorrusia detuvo a los dos candidatos de la oposición que se postularon contra él en las elecciones presidenciales de marzo de 2006. Uno de ellos cumple una condena de cinco años y medio de prisión por “vandalismo”.

De manera similar, en 2005, en un momento en que Egipto seguía sometido a la presión democratizadora de Estados Unidos, el presidente Mubarak permitió que otros candidatos compitieran contra él. Según los resultados oficiales, Ayman Nour, su contrincante más enérgico y popular, obtuvo el siete por ciento de los votos. Sin embargo, para garantizar que la candidatura de Nour no fomentara la aparición de otros contrincantes más formidables en el futuro, el gobierno egipcio le condenó a cinco años de prisión, después de un juicio injusto por cargos políticamente motivados de falsificación.

Una vez más en las elecciones parlamentarias de 2005, tras el poderoso resultado de Hermanos Musulmanes, el grupo de oposición más numeroso del país, el gobierno egipcio arrestó a más de un millar de sus miembros, algunos de los cuales mantuvo detenidos hasta ocho meses. El gobierno ha prohibido la actividad política con una base religiosa, eliminando así la posibilidad de que Hermanos Musulmanes pueda ser un partido político legalmente reconocido. El gobierno también ha debatido la posibilidad de prohibir las candidaturas independientes, la manera en que los miembros de Hermanos Musulmanes han podido participar hasta ahora en las elecciones.

Israel ha llevado este proceso a un nuevo nivel al detener a candidatos incluso después de que ganan las elecciones. Israel, consternado por la victoria de Hamas en las elecciones parlamentarias de 2006, detuvo a sus legisladores para que el partido no pudiera obtener el quórum en el Parlamento.

Violencia política

La violencia es un instrumento que se utiliza habitualmente para controlar la democracia. En Líbano, asaltantes no identificados han asesinado a una serie de políticos destacados de la mayoría parlamentaria, que ha estado librando una constante batalla política contra Siria y sus aliados en Líbano. En Chechenia, Ramzan Kadyrov—el presidente instaurado por el Kremlin—utiliza a las fuerzas de seguridad denominadas “Kadyrovtsy” para imponer brutalmente su gobierno. Hun Sen, primer ministro de Camboya desde 1985, ha empleado la violencia en una elección tras otra para silenciar la disidencia, lo que incluye numerosos asesinatos de miembros del partido de la oposición, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y líderes sindicales. Las autoridades etíopes reaccionaron ante las inesperadas victorias de la oposición en las elecciones de 2005 con la disolución

violenta de manifestaciones pacíficas y la detención de la mayoría de los líderes de la oposición.

En Zimbabue, que ha convocado a elecciones presidenciales y parlamentarias para marzo de 2008, el gobierno ha dado rienda suelta a milicias de jóvenes y “veteranos de guerra” para que golpeen, torturen y violen a figuras opositoras, y la policía ha hecho un uso excesivo de la fuerza, a veces letal, para disolver las manifestaciones de la oposición. En la República Democrática del Congo, los soldados y la policía hicieron un uso excesivo de la fuerza y mataron a más de un centenar de civiles durante la represión de protestas, a veces violentas, contra la corrupción electoral en enero y febrero de 2007. En Nigeria, el partido gobernante reclutó a “cultos” de tipo pandillero para frenar a la oposición antes de las elecciones de abril de 2007. En las elecciones parlamentarias de 2005 en Egipto, cuando las encuestas de salida de los lugares de votación mostraron un aumento de las victorias de candidatos afiliados con Hermanos Musulmanes, las fuerzas de seguridad egipcias impidieron físicamente a los votantes llegar a los lugares de votación en los bastiones de esta organización y, cuando posteriormente estalló la violencia, mataron a 11 personas cuando intentaban votar.

Silenciando a los medios de comunicación

Unas elecciones significativas exigen libertad de prensa—para subrayar las cuestiones que requieren la atención del gobierno y permitir el escrutinio público de las distintas visiones políticas de los candidatos. Los medios de comunicación también son esenciales para transmitir las preocupaciones populares entre períodos electorales—una aportación necesaria dado que un simple voto cada cierto número de años es un método crudo e insuficiente para dar a conocer las preocupaciones de los ciudadanos. Por lo tanto, no es sorprendente que los gobiernos que intentan controlar el proceso democrático quieran silenciar a la prensa.

Uno de los primeros objetivos del presidente Putin de Rusia fue la prensa independiente. Hoy en día, todos los principales canales de televisión y radio, y la mayoría de los periódicos más importantes del país están en manos de partidarios del Kremlin. Este panorama de control de los medios de comunicación fue una de las herramientas más importantes de Putin para asegurarse de que la oposición no tuviera posibilidad de amenazar su dominio político, tanto en las elecciones

parlamentarias de diciembre de 2007 como en las elecciones presidenciales previstas para marzo de 2008.

El presidente de Venezuela Hugo Chávez, haciendo un uso arbitrario del proceso regulatorio, se negó a renovar la licencia de RCTV, uno de los cuatro principales canales de televisión del país y el único con cobertura nacional que se había atrevido a mantener una línea editorial antichavista. En 2003, de acuerdo con las represivas leyes de prensa de Zimbabwe, se cerró el Daily News, el único diario independiente del país.

Egipto encarceló a periodistas y blogueros por delitos tales como criticar a Mubarak y “socavar la dignidad del país”, y divulgar “noticias falsas... que podrían alterar el orden público”. Azerbaiyán detuvo al menos a una decena de periodistas con una serie de falsas acusaciones para impedir las críticas contra el presidente Aliev y su gobierno. También decretó el cierre del principal periódico independiente. Kazajstán cerró un canal de televisión y un semanario propiedad del enajenado yerno del Presidente, ahora oponente político. Al igual que en Azerbaiyán, también se recurre a las leyes penales contra el libelo para encarcelar a los críticos con acusaciones como “injurias al honor y la dignidad” del Presidente. Desde 2002, al menos seis periodistas han muerto en “accidentes” sospechosos en Kazajstán.

Impidiendo los mítines de la oposición

Un método empleado por los candidatos para comunicarse con sus simpatizantes y demostrar su fuerza política es la organización de mítines públicos. Sin embargo, dado que los mítines de la oposición con numerosa concurrencia pueden demostrar lo infundado de las afirmaciones del gobierno sobre su amplio respaldo popular, estas manifestaciones son otro de los objetivos favoritos de la represión.

En Malasia, por ejemplo, donde están prohibidas las reuniones públicas de más de cinco personas sin autorización oficial, la policía empleó agua rociada con productos químicos y gases lacrimógenos para disolver una marcha ordenada y pacífica en demanda de reformas electorales, con vistas a las elecciones previstas para principios de 2008. En Rusia, las autoridades golpearon, detuvieron y hostigaron a participantes en protestas políticas pacíficas, lo que incluye la detención en noviembre de 2007 de Gary Kasparov, antiguo campeón de ajedrez y actual líder opositor.

En Zimbabue, policías antidisturbios armados disolvieron mítines políticos en febrero de 2007 mediante el lanzamiento de gases lacrimógenos contra simpatizantes de la oposición y la detención de más de 70 de ellos en las ciudades de Harare y Bulawayo, antes de imponer una prohibición de tres meses de cualquier mitin o manifestación política en Harare, la capital del país. Las autoridades también disolvieron violentamente mítines en Egipto y la República Democrática del Congo.

Apagando a la sociedad civil

Además de partidos políticos, una democracia vibrante exige la existencia de una variedad de asociaciones y organizaciones para que los ciudadanos puedan canalizar el respaldo a sus preferencias políticas y hacer oír sus voces. Por lo tanto, estas organizaciones de la sociedad civil son otro objetivo habitual de los gobernantes autocráticos.

En Rusia, por ejemplo, una ley de 2006 que regula las organizaciones no gubernamentales (ONG) ha servido de pretexto para aumentar el acoso gubernamental. La ley exige a las organizaciones que presenten informes anuales sobre sus actividades y usos de fondos extranjeros bajo pena de liquidación—una sanción que ya se ha utilizado. Mientras tanto, las organizaciones se han visto sometidas a inspecciones intrusivas, y existe preocupación por que una ley de 2007, que permite calificar de “extremista” y sancionar duramente cualquier delito cometido por motivos políticos o ideológicos, se utilice para la silenciar la disidencia.

En Turkmenistán, entre las duras restricciones sobre las ONG se encuentran la necesidad de notificar al gobierno todas las donaciones recibidas, informarlo de todas las reuniones y permitir la participación en ellas de un representante gubernamental. Sólo se han registrado tres ONG independientes desde 2003, y sólo una de ellas tiene algo que ver con los derechos humanos y el rendimiento de cuentas. En Uzbekistán, desde la masacre de Andiján de 2005, al menos 17 defensores de los derechos humanos han sido encarcelados por motivos políticos, docenas de ellos han tenido que abandonar su trabajo de derechos humanos o abandonar definitivamente el país, y numerosas organizaciones internacionales han sido expulsadas del mismo. Emiratos Árabes Unidos prohíbe la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil y, en agosto de 2007, la Autoridad Palestina anunció que iba a suspender a 103 organizaciones de la sociedad civil por una variedad de tecnicismos.

En países en que los patrocinadores locales de ONG críticas del gobierno están expuestos a la cólera oficial, la limitación de las fuentes externas de financiamiento constituye un serio obstáculo para la existencia de voces independientes organizadas. No obstante, Egipto suspendió las actividades de una organización local de derechos humanos promotora de campañas enérgicas contra la tortura, mediante la recuperación de una denuncia hecha hace años por aceptar fondos de un donante extranjero sin permiso oficial. Jordania y Bahrein han propuesto leyes similares que exigen autorización gubernamental para el uso de fondos procedentes del extranjero. Irán y Siria ya han adoptado este requisito y ejercen un control total del funcionamiento cotidiano de la sociedad civil. El gobierno tunecino ha bloqueado las donaciones de la Unión Europea a la Liga Tunecina de Derechos Humanos y otras organizaciones independientes.

Debilitando el Estado de derecho

La mayor parte de la represión y la manipulación antes descritas es ilegal. Los gobiernos que intentan emplearlas tienen que evitar la supervisión judicial independiente. En ocasiones lo consiguen mediante el maltrato y la detención de abogados, como en Zimbabue y China. En otras se logra mediante amnistías por cualquier crimen cometido. Por ejemplo, el presidente Musharraf de Pakistán y los gobernantes militares de Tailandia forzaron la aprobación de enmiendas constitucionales para salir impunes por las acciones emprendidas durante sus respectivos golpes. Musharraf también destituyó a los magistrados del Tribunal Supremo que amenazaron con dictaminar en contra de la legitimidad de su selección como presidente, a los que reemplazó por partidarios acomodaticios que rápidamente validaron el nombramiento.

La débil respuesta internacional

El uso de estas técnicas para trivializar la democracia no se produce dentro de un vacío político. Puede que los gobiernos abusivos quieran legitimarse con poco esfuerzo, pero hace falta que otros gobiernos se lo permitan. Los demócratas de media tinta logran, en gran medida, hacerse pasar por lo que no son gracias a las reducidas expectativas de las democracias más establecidas.

El problema reside en parte en la competencia de intereses. Los posibles defensores de una visión más significativa de la democracia están demasiado dispuestos a permitir que las oportunidades comerciales, el acceso a los recursos o los presuntos

requisitos de la lucha contra el terrorismo anulen la preocupación por las credenciales democráticas de un gobierno. Sin embargo, el problema también consiste en parte en evitar la hipocresía. Incluso las democracias aparentemente florecientes pueden, como se ha señalado anteriormente, ver inconvenientes en la adopción de todos los derechos que forman parte de una verdadera democracia por temor a violar ellos mismos alguno de ellos.

La situación se ve agravada por el tradicional problema de la incoherencia en la promoción de la democracia. Hoy en día, por ejemplo, las fuertes críticas del gobierno de Estados Unidos contra las deficiencias democráticas tienden a reservarse para sus tradicionales adversarios o países paria, como Siria, Birmania y Cuba. Washington lleva mucho tiempo eximiendo de sus críticas a aliados como Arabia Saudita, Túnez o Etiopía; y su breve presión sobre otros países como Egipto o Jordania se ha desvanecido. De hecho, el gobierno de Estados Unidos es con frecuencia una importante fuente de financiamiento para estos gobiernos aliados, a pesar de sus prácticas represivas. Este evidente doble rasero hace que la promoción de la democracia parezca una conveniencia política, más que un compromiso de principios, lo que debilita la presión para un verdadero cambio democrático.

Etiopía constituye un ejemplo de los países que se benefician de este doble rasero. El gobierno del primer ministro Meles Zenawi detuvo a miles de manifestantes que protestaban contra el fraude en las elecciones de 2005 y acusó de traición a 18 periodistas. Estas detenciones formaron parte de una práctica más general de represión, que incluye el uso de la tortura, la detención y la intimidación de personas consideradas opositores políticos y, más recientemente, la extraordinaria brutalidad en la represión de la insurgencia en la región de Ogaden y los combates contra las fuerzas islámicas de la vecina Somalia. El gobierno de Estados Unidos ha expresado su consternación por la represión postelectoral, pero Etiopía, aliado clave en la lucha antiterrorista, sigue siendo el mayor beneficiario de la asistencia estadounidense en el África Subsahariana.

Etiopía es también uno de los principales receptores de asistencia de la Unión Europea (UE) en África. Después de la violencia durante las elecciones de 2005, la UE, junto con el Banco Mundial y el Reino Unido, suspendieron parte de su asistencia presupuestaria directa a Etiopía, pero, desde entonces, el Reino Unido ha incrementado su ayuda.

Jordania también se ha beneficiado de la reducción de las expectativas democráticas, debido sobre todo al temor del gobierno de Estados Unidos a que los islamistas del país pueden replicar la victoria de Hamas en los Territorios Palestinos Ocupados, pero también a la aparente gratitud de Washington por la asistencia de Jordania en la lucha contra el terrorismo, suministrando centros clandestinos de detención donde se puede torturar a los sospechosos entregados por Estados Unidos. Según se informó, las elecciones municipales de julio de 2007 en Jordania se vieron afectadas por el fraude masivo, que incluyó el traslado en autobús de soldados a los bastiones de la oposición para que votaran a favor del gobierno, votos múltiples por persona y manipulación del registro electoral. Sin embargo, tanto el Embajador como el Congreso de Estados Unidos felicitaron a Jordania por ejercer sus derechos democráticos. Algunas de estas conductas se repitieron aparentemente en las elecciones parlamentarias de noviembre, pero el Departamento de Estado de Estados Unidos “elogió” al gobierno jordano por “garantizar otro avance en el proceso de desarrollo político del país”. El Departamento de Estado alabó especialmente el uso de “observadores nacionales independientes” sin señalar, como se mencionó anteriormente, que el gobierno había incumplido su promesa de permitirles el acceso a los lugares de votación y les había obligado a observar el proceso desde el exterior.

La reacción de la Unión Europea a las elecciones jordanas no estuvo más basada en los principios. No se registró ninguna protesta pública, a pesar de que Jordania, como miembro de la Política Europea de Vecindad (PEV), ha firmado un Acuerdo de Asociación con la UE en el que se supone que el respeto por los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales es un “elemento esencial”. Esta ausencia de actuación refleja otros problemas más amplios de la PEV, ya que, a diferencia de los exitosos criterios de Copenhague para el acceso a la UE, carece de criterios o plazos asociados, y se está concentrando cada vez más en cuestiones tales como la cooperación en la administración de fronteras y el control de la migración.

Dicho respaldo carente de principios sugiere que Washington y, con frecuencia, la Unión Europea están dispuestos a aceptar una farsa electoral siempre que el “ganador” sea un aliado estratégico o comercial. La imparcialidad de las elecciones y la transparencia de las condiciones de campaña parecen importar menos que la orientación política del presunto demócrata.

Una falsa dicotomía: Tirano conocido o tirano por conocer

La débil respuesta internacional a la manipulación de la democracia se basa en parte en el temor a que un autócrata pueda ser sustituido por alguien o algo peor. Desde la victoria parlamentaria del FIS en Argelia en 1991, la ascensión de la política del islamismo ha agravado especialmente dicho temor. Los dictadores ingeniosos han aprendido a servirse de una lógica del “yo o ellos” para justificar la continuación de su gobierno, pero esta dicotomía suele ser falsa.

Por ejemplo, en Egipto, Mubarak se ha beneficiado de la preocupación occidental por que los islamistas ganen con justicia alguna elección en el país. Como prueba de ello, Mubarak puede recurrir a las elecciones parlamentarias de 2005, cuando los candidatos apoyados por Hermanos Musulmanes ganaron la mayoría de los puestos que disputaron. No cabe duda de que Hermanos Musulmanes es una organización verdaderamente popular, pero parte de esa popularidad se deriva de la limitación de alternativas. En 30 años, el gobierno egipcio se ha negado a registrar a más de 60 partidos políticos y ha aceptado a sólo dos, uno de los cuales suspendió posteriormente. Muchos de estos partidos podrían haber sido un punto de confluencia para la oposición secular.

Como se señaló anteriormente, Hermanos Musulmanes tampoco puede formar un partido político, pero ha logrado ganarse seguidores mediante la provisión de servicios sociales y el desarrollo de una reputación por encima de la corrupción. Por lo tanto, hoy en día, para un egipcio que busca una alternativa a Mubarak y su gobernante Partido Nacional Democrático, Hermanos Musulmanes parece ser la única opción real. Esto le viene bien a Mubarak, ya que, en vistas de esta falsa alternativa política, tiene más probabilidades de que Occidente acepte sus manipulaciones electorales. Mucha de la presión democratizadora de Estados Unidos cesó con los importantes resultados electorales de Hermanos Musulmanes en 2005.

En Pakistán, Musharraf ha utilizado una estrategia similar. Justificó el “Estado de emergencia” como la única alternativa al gobierno de Al Qaeda y los extremistas islámicos. Los países occidentales aceptaron e incluso abrazaron la manipulación del panorama político por parte de Musharraf como una forma de “moderación” y un paso en el camino hacia la “democracia”. No importaba que los pakistaníes hubieran votado históricamente a favor de partidos políticos del centro (a pesar de

ser con frecuencia corruptos e ineptos), que los partidos islamistas nunca hubieran obtenido más del once por ciento de los votos en las elecciones generales, que los ataques de Musharraf con el centro moderado le hubieran obligado a intentar aliarse con los islamistas y a la vez respaldarlos, y que la falta de posibilidades de un cambio político pacífico bajo un régimen militar fuera una fuerte justificación para el reclutamiento de islamistas.

La respuesta incoherente del gobierno Bush a la declaración del Estado de emergencia fue ilustrativa de dicha situación. Por un lado, el subsecretario de Estado John Negroponte voló a Islamabad para pedirle a Musharraf que levantara el Estado de emergencia y pusiera en libertad a los miles de presos políticos que había encarcelado. Llegó incluso a decir, acertadamente, que el “Estado de emergencia es incompatible con la celebración de elecciones libres, justas y creíbles”. Hasta Bush instó a Musharraf a que “se quitara el uniforme”.

Pero en el momento de escribir este informe, el gobierno de Estados Unidos nunca le había pedido a Musharraf que restituyera a los jueces independientes del Tribunal Supremo a los que había destituido, en sustitución de aliados complacientes que bendijeron su selección como presidente siendo jefe de las fuerzas armadas. Tampoco había suspendido ninguna parte de su masiva asistencia militar a Pakistán. Desde Washington se transmitió el mensaje de que, antes de arriesgar el mandato de su aliado antiterrorista, estaban dispuestos a disociar la democracia del Estado de derecho. También parecían dispuestos a impedir que los tribunales siguieran liberando a los sospechosos desaparecidos bajo la custodia de los abusivos servicios secretos pakistaníes, cuyas actividades de detención e interrogación el gobierno de Estados Unidos había tenido la ocasión de aprovechar.

El temor al aumento de la militancia islámica también parece derivarse de la confusa respuesta internacional a Bangladesh. Al principio, la comunidad internacional propuso una visión de la democracia más basada en los principios. Las Naciones Unidas y la Unión Europea concluyeron que las elecciones previstas para enero de 2007 estaban demasiado comprometidas como para justificar el envío de observadores, lo que contribuyó a su posposición. Sin embargo, el gobierno provisional formado ostensiblemente para garantizar unas elecciones libres y justas ha declarado en cambio el “Estado de emergencia” y, en la práctica, se ha convertido en un vehículo para el control militar, bajo el que han habido numerosas detenciones arbitrarias, casos de tortura y asesinatos con impunidad de personas

detenidas por parte de las fuerzas de seguridad. Los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido e India han expresado su preocupación por el lento progreso de los preparativos electorales, pero no por la mala situación de los derechos humanos en el país. Tampoco han instado a las fuerzas armadas a que devuelvan los plenos poderes a un gobierno civil. Sin embargo, las críticas de la UE han sido más abiertas y está prestando asistencia financiera para la promoción de la gobernabilidad y los derechos humanos.

Dicha complicidad con los regímenes dictatoriales se rationaliza a veces con afirmaciones paternalistas de que las personas afectadas—con frecuencia musulmanes y árabes—no están “preparados” para la democracia, que los riesgos que corren estas sociedades son simplemente demasiado grandes para concederles los mismos derechos a la libertad y al autogobierno a los que aspiran los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo. Dicho de otro modo, los gobiernos occidentales se quejan a veces de que no hay una oposición que merezca su apoyo. Pero esta supuesta falta de preparación, la falta de alternativas políticas, no son más que las distorsionadas condiciones políticas que les han legado, con el consentimiento occidental, los líderes de estos países. El principal objetivo de la represión de los pseudo demócratas es impedir la aparición de una oposición efectiva. De hecho, en el caso de Arabia Saudita, la falta de preparación es una excusa que ha empleado el propio gobierno para evitar las elecciones. En Pakistán, Musharraf ofreció excusas similares y acusó a los países occidentales de tener “una obsesión irrealista con su forma de democracia, sus derechos humanos y libertades civiles... que han tardado siglos en (desarrollar), pero quieren que adoptemos en meses... Esto no es posible”.

El rechazo de dicha lógica tampoco implica que la celebración inmediata de elecciones libres sea la respuesta. Al igual que el extremismo prospera en un entorno de restricción política, también puede predominar en unas elecciones repentina convocadas en dicho ambiente. Es necesaria una respuesta más sofisticada, una que pueda forzar a los autócratas a permitir una serie de opciones políticas antes de precipitarse a convocar elecciones—es decir, dar prioridad al respeto por una variedad de derechos políticos fundamentales por encima del propio proceso electoral. En lugar de aceptar las tergiversadas opciones de un dictador como las únicas concebibles, los promotores de la democracia deben presionar para que se transforme el panorama político de manera de los electores puedan contar con una gama significativa de opciones políticas antes

de ejercer su voto. Esta verdadera capacidad de elección suele ser enemiga del extremismo.

Confiando en el “demócrata” en lugar de en los principios democráticos

Un error común consiste en apoyar a un proclamado “demócrata” en particular en lugar de los principios de derechos humanos que dan sentido a la democracia. Las democracias establecidas parecen buscar cada vez más a las personas—en lugar de las instituciones—para salvar la situación, con la esperanza de que los ciudadanos equiparen la ascendencia de un líder muy dado a la retórica democrática con el establecimiento del propio sistema democrático, a pesar de que la primera lección de la teoría democrática es que el poder ilimitado tiende a convertirse en tiranía. Este fallo ha caracterizado ciertamente la política occidental con respecto al Pakistán gobernado por Musharraf, pero también ha desempeñado un papel destacado en la respuesta a países tan diversos como Rusia, Nigeria o Georgia.

Bush aceptó divinamente a Putin en 2001 después de “mirarle a los ojos y ver su alma”. Putin procedió a debilitar sistemáticamente casi todos los centros de influencia que competían con su poder en Rusia—la Duma, los gobernadores regionales, la prensa, las ONG e incluso los oligarcas. El gobierno de Estados Unidos reaccionó finalmente, pero ya había perdido una primera oportunidad de desarrollar las relaciones entre los dos países alrededor de los principios, en lugar de la química entre dos personas.

Alemania, que desempeña habitualmente un papel destacado en el diseño de la política de la Unión Europea con respecto a Rusia, mantuvo una postura ambivalente en 2007. Quizá por haber crecido en el Este bajo la dominación soviética, la canciller alemana Angela Merkel tiene una visión más clara de Putin que su mercantilista antecesor, Gerhard Schröder. Se ha manifestado abiertamente en varias ocasiones sobre las tendencias inquietantes en Rusia y, durante su primer viaje oficial a Moscú en 2006, insistió en visitar a ONG de derechos humanos. Esto sembró la esperanza de que Alemania elevaría la importancia de los derechos humanos cuando asumiera la presidencia de la UE durante el primer semestre de 2007. De hecho, los derechos humanos continuaron estando ampliamente consignados a las consultas de bajo nivel. Merkel puso sobre la mesa las cuestiones de derechos humanos durante la cumbre entre la UE y Rusia de mayo de 2007, cuando se reprimieron las manifestaciones de protesta; pero la siguiente

presidencia de la UE, a cargo del gobierno portugués, socavó dicho esfuerzo al equiparar la preocupación por los derechos humanos con el “sermoneo”.

Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, así como la UE, criticaron abiertamente el fraude evidente en las elecciones presidenciales y parlamentarias nigerianas de abril de 2007, pero estos gobiernos occidentales parecían ansiosos por empezar a colaborar con el presidente Yar’Adua porque su retórica era reformista, a pesar de que las circunstancias de su elección habían sentado un precedente mucho más poderoso que sus discursos conciliadores. Yar’Adua tampoco tradujo su mensaje reformista en el enjuiciamiento de los responsables del fraude y la violencia política paralela. De nuevo, el mensaje parece ser: En tanto el líder en cuestión tenga una relación amistosa con los países occidentales, hasta unas elecciones fingidas pueden ser suficientes para legitimar su poder.

En Georgia, la Revolución de la Rosa de 2003 llevó al poder a un gobierno firmemente comprometido con los principios democráticos y una vibrante sociedad civil. Pero problemas graves de derechos humanos persistieron en los años siguientes, especialmente en el sistema de justicia penal. Sin embargo, las organizaciones internacionales y los gobiernos—sobre todo el de Estados Unidos—se resistieron a criticar enérgicamente la situación queriendo creer en las buenas intenciones de un aliado con educación occidental, el presidente Mikheil Saakashvili. El peligro de aceptar a una persona en lugar de los principios democráticos se puso de manifiesto en noviembre de 2007, cuando el gobierno georgiano lanzó una campaña violenta de represión de las protestas e impuso un Estado de emergencia durante nueve días.

Como se señaló anteriormente, la política de Estados Unidos con respecto a Pakistán ha estado dominada por esta tendencia a reducir la democracia al favoritismo por ciertas personalidades. Además de aceptar la disolución del Tribunal Supremo por parte de Musharraf para conservar su presidencia, el gobierno Bush dedicó una enorme energía a negociar un acuerdo entre Musharraf y su candidata preferida para dirigir el país, la ex primera ministra Benazir Bhutto, allanando el camino para su regreso a Pakistán desde el exilio. Pero en septiembre, cuando el gobierno de Musharraf bloqueó el intento inicial de regresar al país del ex primer ministro Nawaz Sharif, su principal contrincante civil, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró: “Se trata total y completamente de una cuestión que tiene que resolver Pakistán”.

Fallando a Turquía

Turquía constituyó quizás la prueba más importante del compromiso de la Unión Europea con la democracia y los derechos humanos. En principio, la UE está comprometida a admitir a Turquía como su miembro—una decisión de enorme importancia—si Ankara cumple con los criterios de Copenhague sobre democracia y derechos humanos. Pero algunos líderes europeos clave—especialmente la canciller Merkel de Alemania y el presidente Nicolás Sarkozy de Francia—se han manifestado contra la entrada de Turquía en la UE. Al considerarse cada vez más remota la posibilidad de que Turquía acceda a la UE, se ha reducido la influencia de la propia UE y de los que han citado la posible entrada en la UE como un motivo para la reforma en Turquía. No es sorprendente que las fuerzas armadas hayan empezado una vez más a inmiscuirse en los asuntos de Estado, llegando incluso a lanzar la antes mencionada campaña golpista de correos electrónicos para impedir el nombramiento de Adbullah Gül como presidente. El hecho de que el gobierno civil lograra frustrar dicho intento golpista se debió mucho más a la insistencia del pueblo turco que a la cada vez más débil promesa de la UE de permitirle el acceso a una Turquía democrática y respetuosa de los derechos humanos

Conclusión

Es una muestra de esperanza que hasta los dictadores han llegado a creer que el camino a la legitimidad pasa por la adopción de credenciales democráticas. El principio de que la soberanía reside en el pueblo y que los ciudadanos y ciudadanas tienen en última instancia la autoridad de gobernar está garantizado por valores ampliamente compartidos y profundamente arraigados. Pero este progreso es frágil, ya que su significado depende en gran parte del compromiso de las democracias establecidas en el mundo. Si aceptan a cualquier dictador que monte una farsa electoral, si permiten que su compromiso con la democracia se diluya por la búsqueda de recursos, oportunidades comerciales y visiones limitadas de la seguridad, van a lograr devaluar la democracia. Y si los dictadores pueden autoproclamarse “demócratas” sin consecuencias, habrán adquirido un poderoso instrumento para desviar las presiones por el respeto a los derechos humanos. Ha llegado el momento de dejar de vender la democracia a precio barato y empezar a sustituirla por una visión más amplia y significativa del concepto que incorpore los principios de derechos humanos.

Este informe

Este informe es la décimo octava evaluación anual de las prácticas de derechos humanos en todo el mundo. Resume cuestiones clave de derechos humanos en más de 75 países, partiendo de los acontecimientos ocurridos hasta noviembre de 2007.

En cada capítulo sobre países se identifican cuestiones importantes de derechos humanos, se examina la libertad de los defensores locales de los derechos humanos para ejercer su trabajo y se analiza la respuesta de actores internacionales clave, como Naciones Unidas, la Unión Europea, Japón, Estados Unidos y varias organizaciones e instituciones regionales e internacionales.

Este informe es un reflejo del extenso trabajo de investigación emprendido por el personal de Human Rights Watch en 2007, que suele colaborar estrechamente con los y las activistas de derechos humanos en el país en cuestión. También demuestra el trabajo de nuestro equipo de incidencia política, que observa los acontecimientos políticos y se esfuerza por persuadir a los gobiernos y a las instituciones internacionales de que frenen los abusos y promuevan los derechos humanos. Los informes de Human Rights Watch publicados en el transcurso del año contienen exposiciones más detalladas de muchos de los temas tratados en los breves resúmenes recopilados en este volumen. Pueden consultarse en el sitio web de Human Rights Watch, www.hrw.org.

Como en años anteriores, este informe no incluye un capítulo sobre cada país en el que Human Rights Watch trabaja, ni tampoco trata todas las cuestiones importantes. Con frecuencia, el hecho de no incluir un país o tema particular no se debe más que a las limitaciones de personal y no debe interpretarse como una valoración de la importancia del problema. Human Rights Watch carece simplemente de la capacidad para abordar muchas violaciones graves de los derechos humanos.

Entre los factores que consideramos para determinar el enfoque de nuestro trabajo en 2007 (y por lo tanto el contenido de este informe) están el número de personas afectadas y la gravedad del abuso, el acceso al país y la disponibilidad de información sobre el mismo, la posibilidad de influir a las fuerzas abusivas y la importancia de abordar ciertas preocupaciones temáticas y reforzar el trabajo de las organizaciones locales de derechos humanos.

El Informe Anual no contiene capítulos separados sobre nuestro trabajo temático, sino que incorpora directamente dicho material en los apartados sobre países.

Puede consultar el sitio web de Human Rights Watch para una cobertura más detallada de nuestro trabajo sobre derechos del niño, derechos de la mujer, cuestiones armamentísticas y militares, negocios y derechos humanos, VIH/SIDA y derechos humanos, justicia internacional, terrorismo y antiterrorismo, refugiados y personas desplazadas, y los derechos de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero, y para obtener información sobre nuestros festivales internacionales de cine.

Kenneth Roth es el director ejecutivo de Human Rights Watch.